

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META**

**Magistrado: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO**

Villavicencio, tres (3) de abril de dos mil veinte (2020)

<b>REFERENCIA:</b>	CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD.
<b>ASUNTO:</b>	CONTROL DE LEGALIDAD DEL DECRETO 022 DEL 26 DE MARZO DEL 2020 PROFERIDO POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META, POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA MEDIDA DE PICO Y CÉDULA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META.
<b>RADICACIÓN:</b>	50001-23-33-000-2020-00233-00.

### I. AUTO

Procede el Despacho a revisar el cumplimiento de los requisitos de ley que debe reunir el asunto de la referencia, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes:

### II. ANTECEDENTES

El 31 de marzo del 2020, el alcalde de San Juan de Arama - Meta, allegó el Decreto 022 del 26 de marzo del 2020, proferido por esa entidad, por medio del cual se decreta la medida de Pico y Cédula en el municipio de San Juan de Arama - Meta; para el respectivo control inmediato de legalidad.

### III. CONSIDERACIONES

Al respecto, es de indicar que el Gobierno Nacional ha tomado diferentes decisiones con el fin de combatir la pandemia del COVID-19 en Colombia, dentro de las cuales dispuso mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, “*por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional*”, declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto.

Adicionalmente, manifestó que adoptarían a través de decretos legislativos, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la

*Referencia: control inmediato de legalidad*  
*Radicación: 50001-23-33-000-2020-00233-00*  
*Auto: Se abstiene de avocar conocimiento de medio de control*

extensión de sus efectos; así mismo, que se dispondría de las operaciones presupuestales necesarias para conjurar la crisis.

En virtud de la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, disponiendo que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del (COVIC-19), estaría en cabeza del presidente de la República; y seguidamente, a través del Decreto No. 420 de 2020, se impartieron instrucciones dirigidas a los gobernadores y alcaldes, para expedir normas en materia de orden público, en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia.

En ese mismo sentido, el alcalde de San Juan de Arama - Meta profirió el Decreto 022 del 26 de marzo del 2020, *“por medio del cual se decreta la medida de Pico y Cédula en el municipio de San Juan de Arama - Meta”*, tomando como medidas: i) la restricción en la circulación de personas dentro del municipio y ii) la penalidad por el incumplimiento a dicha restricción.

Entonces, la autoridad municipal hace remisión a la Ley 1801 de 2016, citada en el acto cuyo control se solicita, en la que se establece que los alcaldes y los gobernadores cuentan con el poder extraordinario para la prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, por lo que podrán disponer acciones transitorias de Policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia - *artículo 14* -.

Conforme lo anterior, podemos aseverar que lo indicado en el Decreto 022 del 26 de marzo del 2020, no constituye una facultad extraordinaria originada en el estado de excepción anunciado, sino que es la aplicación de lo señalado en la Ley 1801 de 2016, encontrándose dentro de las facultades ordinarias otorgadas por el legislador. Por lo tanto, referente al medio de control invocado, el artículo 136 del C.P.A.C.A. se sostiene, lo siguiente:

*“Artículo 136. Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código.*

Referencia: control inmediato de legalidad  
Radicación: 50001-23-33-000-2020-00233-00  
Auto: Se abstiene de avocar conocimiento de medio de control

*Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.”*

Inicialmente, debe el Despacho precisar, que si se quisiera establecer una regla metodológica para definir el ámbito de competencia material del Tribunal en los controles de legalidad derivado de lo establecido en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, cabría indicar que corresponde a aquellos actos administrativos que son expedidos por las autoridades territoriales como consecuencia de una facultad derivada del decreto que declaró el estado de excepción o de los decretos legislativos expedidos como consecuencia del mismo; de tal forma, que si las decisiones que se toman en el acto sometido a control no devienen de estos decretos legislativos, sino que se expiden en desarrollo de atribuciones que preexistían, en principio no son susceptibles del control inmediato de legalidad, pues el artículo 136 del CPCA es claro al indicar que son objeto de control *“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos.”* (Negrilla y subrayado propio)

Lo anterior, no supone que el decreto remitido no tenga control judicial, sino que el mismo debe realizarse a través de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, pues el control inmediato de legalidad tiene un alcance limitado a los aspectos que ya fueron indicados.

Adicionalmente, se advierte que el Decreto 022 del 26 de marzo del 2020 expedido por el municipio de San Juan de Arama - Meta, tuvo como fundamento normativo, las siguientes disposiciones: *“los artículos 2, 49, 315-2 de la Constitución Política, artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, artículos 14 y 202 de la Ley 1801 de 2016, Decreto 475 de 2020”*, lo que quiere decir que tuvo como base las facultades ordinarias del representante legal del ente territorial.

De igual manera, en la parte decisoria se deja por sentado que el alcalde del municipio de San Juan de Arama - Meta, adoptó las medidas de restricción de la circulación bajo lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016; por lo cual, podemos aseverar que no estamos frente al ejercicio de facultades derivadas de los decretos legislativos proferidos en razón de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, sino de las que la Constitución y la Ley le ha permitido realizar como representante legal de un ente territorial.

Así mismo, es de aclarar que pese a citar el Decreto 475 del 2020, expedido por la Presidencia de la República, el tema señalado en dicha disposición se escapa de los supuestos de la medida de pico y cédula, puesto que se refiere a apropiaciones

Referencia: control inmediato de legalidad  
 Radicación: 50001-23-33-000-2020-00233-00  
 Auto: Se abstiene de avocar conocimiento de medio de control

presupuestales y recursos de contribuciones parafiscales; lo que permite señalar que no tiene incidencia en el decreto objeto de estudio.

También el acto hace alusión al decreto 418 de 2020 expedido por el Presidente de la República, el cual no fue expedido dentro de las facultades otorgadas al primer mandatario derivadas de la declaratoria del estado de excepción, sino dentro de las atribuciones que la Ley 1801 de 2016 le confiera al presidente como primera autoridad de policía, por lo que tampoco esta circunstancia justifica el conocimiento del acto remitido a través del control inmediato de legalidad-

Así las cosas, el Despacho se abstendrá de avocar conocimiento frente al control inmediato de legalidad propuesto por el municipio de San Juan de Arama - Meta contra el Decreto 022 del 26 de marzo del 2020, *“por medio del cual se decreta la medida de Pico y Cédula en el municipio de San Juan de Arama - Meta”*, teniendo en cuenta que los fundamentos normativos no contienen un ejercicio de las facultades extraordinarias de la administración derivados de los decretos legislativos expedidos como consecuencia de la declaración del *Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*, sino la aplicación de normatividad dispuesta por el legislador con anterioridad a la declaratoria del estado de excepción.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: ABSTENERSE DE AVOCAR** conocimiento frente al control inmediato de legalidad propuesto por el municipio de San Juan de Arama - Meta contra el Decreto 022 del 26 de marzo del 2020, *“por medio del cual se decreta la medida de Pico y Cédula en el municipio de San Juan de Arama - Meta”*, por las razones expuestas en precedencia.

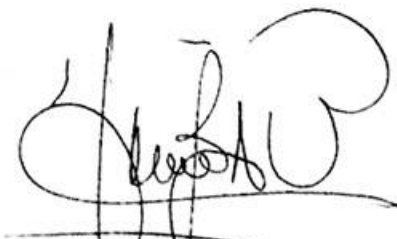
**SEGUNDO:** Notifíquese la presente decisión al delegado de la Procuraduría General de la Nación, garantizando el derecho de contradicción.

**TERCERO:** Por Secretaría infórmese a la comunidad de esta decisión, a través de su publicación en el sitio web de la Rama Judicial, la página web del Tribunal Administrativo del Meta y la red social twitter de la Corporación

**CUARTO:** Por secretaría comuníquese la presente decisión al municipio de San Juan de Arama - Meta por el medio más expedito.

**QUINTO: ARCHÍVENSE** las diligencias, dejando las constancias y anotaciones de rigor en el sistema de información judicial Siglo XXI.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO', written over a horizontal line.

**CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO**  
**Magistrado**